

DECRETO 894/16

Buenos Aires, 27 de julio de 2016

B.O.: 28/7/16

Vigencia: 29/7/16

Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Pensión universal para el adulto mayor. Acuerdos con las provincias. Armonización de sistemas previsionales. Adecuación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del SIPA. Dtos. 897/07 y 2.103/08. Su modificación. Ley 27.260. Reglamentación.

VISTO: el Expte. 2499817731283796 del registro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Ley 27.260; y

CONSIDERANDO:

Que a los fines de la implementación de la Ley 27.260 resulta imprescindible reglamentar diferentes aspectos que ella contiene.

Que en el Tít. I del Libro I de la ley precedentemente mencionada, se creó el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, en adelante “el Programa”, como respuesta a la emergencia existente en materia de litigiosidad previsional.

Que dicha emergencia se debe a la existencia de gran cantidad de juicios iniciados contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que se estiman en cerca de cuatrocientos mil reclamos, así como también de potenciales nuevos reclamos de jubilados y pensionados, que podrían ascender a más de dos millones de casos.

Que la gran cantidad de casos involucrados ha generado largos y costosos procesos administrativos y judiciales provocando un colapso en la justicia y agravando la situación de vulnerabilidad de los jubilados y pensionados.

Que en la mayoría de estos juicios, los jubilados y pensionados reclaman el recálculo del haber inicial por la limitación temporal de la actualización de las

remuneraciones, y la movilidad que luego se otorga en función de los distintos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Que el Programa creado por la citada ley, aborda la problemática dando respuesta a una enorme cantidad de personas, promoviendo la redeterminación del haber inicial y el otorgamiento de la movilidad, e instrumentando acuerdos entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.) y cada jubilado o pensionado que voluntariamente decida participar.

Que a partir de las previsiones del Dto. 807/16 y de la Res. S.S.S. 6/16 se interrumpe la principal causa de generación masiva de juicios, atento que se efectuaron las correcciones necesarias para que las remuneraciones que se toman en cuenta para calcular las nuevas prestaciones se actualicen en forma justa y razonable.

Que los beneficiarios alcanzados son personas de avanzada edad, por lo cual es necesario establecer procesos y mecanismos que puedan satisfacer a los involucrados en un corto plazo procurando generar procesos colectivos y automáticos teniendo en cuenta la enorme cantidad de jubilados a los que les alcanzaría el beneficio.

Que en virtud de lo expuesto resulta imprescindible facultar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.), para que establezca procedimientos informáticos ágiles, que permitan dar respuesta a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible.

Que en esa línea, es necesario que los acuerdos transaccionales se puedan celebrar a través de la página web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.) que se habilite a tal efecto, garantizando la confidencialidad y seguridad que prevén las normas vigentes.

Que en lo que refiere a la manifestación de voluntad de la parte y su letrado, además de los medios tradicionales, la ley mencionada expresamente establece que, también se admitirá como firma "... cualquier otro medio que otorgue garantías suficientes sobre la identidad de la persona".

Que en este sentido, la exteriorización de la voluntad de los beneficiarios y sus letrados podrá realizarse a través de la página web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.), con ingreso de su Clave de la Seguridad Social, de la incorporación de la huella digital a través de un sistema de identificación biométrica, o de otros medios que establezca la autoridad de aplicación.

Que los acuerdos transaccionales que se celebren entre las partes, deberán procurar por un lado, que el jubilado se encuentre adecuadamente informado, y por el otro, que la cuestión litigiosa quede definitivamente resuelta con la aceptación de los términos del acuerdo.

Que para que el Programa se pueda implementar, se requiere contar con todos los datos de la historia previsional de los beneficiarios. Sin embargo, ante la eventualidad de que ese recaudo no se cumpla, resulta imprescindible que la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.) establezca mecanismos alternativos, que permitan brindar una respuesta a las personas cuyos datos no se encuentren en el sistema. Esas alternativas deberán tener en cuenta los parámetros establecidos en la ley, y disponer pautas de aplicación general, a partir de las cuales se intente arribar a resultados similares.

Que en los casos en que no haya juicio iniciado hasta el plazo establecido por la Ley 27.260 mencionada, a fin de evitar mayores gastos para los jubilados, corresponde que la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.) se haga cargo de los honorarios de los abogados de aquéllos, los que se establecen en una suma fija, que comprende todos los trabajos profesionales necesarios para participar del Programa, desde el asesoramiento inicial, hasta el cumplimiento del acuerdo. La Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.) podrá reconocer una suma adicional en concepto de gastos judiciales correspondientes a cada jurisdicción.

Que atento la conveniencia que los procesos se desarrollen en los tribunales más cercanos al domicilio del jubilado, como señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Pedraza, Héctor Hugo c/A.N.Se.S. s/Acción de amparo” y “Constantino, Eduardo Francisco c/A.N.Se.S. s/Reajustes varios”, y en atención al lugar de cumplimiento de la obligación que emanará del acuerdo, corresponde que los expedientes de homologación tramiten ante el juez Federal del domicilio en el que habitualmente percibe el beneficio cada jubilado.

Que dada la gran cantidad de expedientes de homologación que deberán tramitar ante los tribunales pertinentes, es necesario tomar medidas que sirvan para descomprimir el trabajo de dichos tribunales en esta primera etapa.

Que, asimismo, hay una gran cantidad de jubilados que se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad, como ser, aquéllos de mayor edad, los que padecen una enfermedad grave, y los que perciben haberes de menores montos.

Que por dichos motivos, y por el riesgo que implicaría prolongar el reajuste de sus haberes, dichos jubilados requieren una solución con la mayor urgencia posible.

Que habiéndose asignado los recursos correspondientes, razones de justicia y de adecuada implementación del Programa justifican instruir a la autoridad de aplicación para que establezca procedimientos abreviados que permitan brindar soluciones a este grupo de jubilados con mayor rapidez.

Que resulta necesario establecer parámetros proporcionales para los beneficiarios alcanzados por el Programa que estén incluidos en algún beneficio relacionado con normativas que contemplen la aplicación de la tarifa social, invitándose a los Gobiernos provinciales y municipales a implementar disposiciones similares en sus respectivos ámbitos.

Que, asimismo, en atención a lo previsto en la Ley 27.253 que estableció un régimen de reintegro por compras en comercios de venta minorista, y a efectos de no desnaturalizar los objetivos planteados por dicha ley, corresponde contemplar la situación de los jubilados y pensionados que podrían verse privados del beneficio establecido en dicho régimen por su participación en el Programa, hasta tanto se efectúen las modificaciones normativas pertinentes.

Que en el Tít. III del Libro I de la Ley 27.260 citada se instituyó la “Pensión universal para el adulto mayor”, de carácter vitalicio y no contributivo, para todas las personas de 65 años de edad o más, que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, consistente en el pago de una prestación mensual equivalente al ochenta por ciento (80%) del haber mínimo garantizado a que se refiere el art. 125 de la Ley 24.241, sus complementarias y modificatorias.

Que uno de los objetivos primarios del Estado nacional es garantizar un piso de protección social para los adultos mayores, instituyendo un derecho ciudadano de carácter universal, desde la vigencia de la ley y por un plazo tope de tres años o hasta tanto se implemente un proyecto de reforma del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que ocurra primero.

Que dicha pensión está destinada a aquellas personas que no cuenten con una prestación previsional contributiva otorgada por el sistema nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cumplir con el objetivo de alcanzar pobreza cero en nuestro país.

Que resulta necesario determinar el organismo a través del cual se otorgará la nueva prestación, siendo la Administración Nacional de la Seguridad Social

(A.N.Se.S.) la entidad adecuada para la tramitación, liquidación y puesta al pago de la pensión referida.

Que en atención a lo dispuesto en el art. 13, incs. 1 y 5 del Tít. III, del Libro I de la ley que por el presente se reglamenta, sobre residencia de los solicitantes, corresponde instruir a todos los organismos de la Administración Pública Nacional para que informen a la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.) los datos disponibles en sus bases de datos a efectos de colaborar en la implementación del control de los requisitos previstos en los incisos mencionados.

Que, asimismo, corresponde establecer el vencimiento del plazo referido en el primer párrafo del art. 22 de la Ley 27.260.

Que mediante la Ley 27.260 antes mencionada, fueron ratificados los acuerdos celebrados entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de fechas 23 y 26 de mayo de 2016.

Que en dichos acuerdos se previó el otorgamiento de un préstamo a favor de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Que a fin de implementar dichos préstamos, es preciso que la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.), el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, celebren los acuerdos pertinentes estableciendo los términos de dichos préstamos.

Que la citada Ley 27.260, en su Tít. V, en el marco de la armonización de los sistemas previsionales, instruyó al Poder Ejecutivo nacional a que arribe, en un plazo de ciento veinte días, a un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido sus regímenes previsionales, de manera de colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional.

Que, asimismo, se previó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.) realice las auditorías correspondientes a fin de evaluar los estados contables y los avances en el proceso de armonización, por lo que corresponde reglamentar el art. 27 de la ley, así como instruir a la A.N.Se.S. al respecto.

Que en consecuencia la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.) realizará a solicitud de cada provincia, las auditorías en el marco conceptual de lo

dispuesto por la Cláusula duodécima del Compromiso Federal, del 6 de diciembre de 1999, ratificado por la Ley 25.235, por lo que corresponde en esta instancia reglamentar el procedimiento a seguir para el desarrollo de las mismas, sus objetivos, la información que deberán aportar las provincias, así como la determinación del resultado financiero corriente global a realizar por la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.) y la elaboración y suscripción de los convenios que dicho organismo celebrará con las autoridades provinciales de cada provincia.

Que la Ley 27.260 previó respecto a las transferencias de fondos que deberán ser determinadas en función de los desequilibrios que estaría asumiendo la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.) si el sistema previsional de que se trata hubiese sido transferido a la Nación y los avances realizados en el proceso de armonización.

Que en consecuencia y con relación a la asistencia financiera a las provincias, la misma estará basada en los resultados financieros auditados de los sistemas previsionales administrados por los organismos provinciales, considerados en forma global y sin posibilidad de que la misma se determine por el resultado financiero de algún subsistema particular.

Que respecto a la armonización normativa previsional, se requerirá a las provincias completar el proceso de armonización normativa en un plazo no mayor a cuatro años.

Que, asimismo, durante dicho período se prevé la suscripción de los convenios entre el Estado nacional y las provincias en los cuales se establecerán el monto de la/s transferencia/s a realizar durante la vigencia del convenio, en base a los resultados auditados del ejercicio anterior y ponderados por los conceptos ya armonizados, por lo que corresponde establecer los mecanismos de determinación de la asistencia financiera para los períodos 2017 a 2020, inclusive.

Que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino tiene entre sus fines: a) atenuar el impacto financiero que sobre el régimen previsional público pudiera ejercer la evolución negativa de variables económicas y sociales; b) constituirse como fondo de reserva a fin de instrumentar una adecuada inversión de los excedentes financieros del régimen previsional público garantizando el carácter previsional de los mismos; c) contribuir a la preservación del valor y/o rentabilidad de los recursos del Fondo; d) atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a

efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales; e) procurar contribuir, con la aplicación de sus recursos, de acuerdo con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, al desarrollo sustentable de la economía nacional, a los efectos de garantizar el círculo virtuoso entre el crecimiento económico sostenible, el incremento de los recursos destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la preservación de los activos de dicho Fondo; y f) atender las erogaciones asumidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.) en el marco del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados creado por la Ley 27.260.

Que las inversiones que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino hace en acciones de sociedades anónimas nacionales mixtas o privadas con oferta pública tienen como finalidad específica contribuir a la preservación del valor y la rentabilidad de los recursos del Fondo, no constituyen un instrumento de política macroeconómica del Estado nacional ni deben utilizarse para la persecución de fines extrasocietarios, en contra o ajenos al interés social.

Que los derechos de representación y de voto son derechos fundamentales para que el accionista custodie el valor de su inversión, puesto que mediante ellos se interviene e influye en la adopción de los acuerdos sociales, se elige a quienes dirigen y representan a la sociedad y, finalmente, se influye en la marcha de la empresa de la que es titular la sociedad anónima.

Que la gestión de los derechos políticos por un órgano distinto al administrador del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) afecta la inmediatez en la toma de decisiones, puede generar conflictos de interés con las finalidades propias del Fondo y, consecuentemente, atenta contra los intereses patrimoniales que dan sustentabilidad al referido Fondo.

Que dada la finalidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), y la necesidad de efectuar reajustes de haberes a aquellos jubilados que por su edad, estado de salud, o monto de la prestación requieran una solución con urgencia, corresponde sustituir los arts. 11 y 12 del Dto. 897, del 12 de julio de 2007, y su modificatorio.

Que los servicios jurídicos pertinentes han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo nacional por el art. 99, incs. 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

TITULO I - Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados

Art. 1 – Instrúyese a la Administración Nacional de la Seguridad Social, organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en adelante A.N.Se.S., a promover y celebrar los acuerdos mencionados en el Tít. I del Libro I de la Ley 27.260.

Art. 2 – Las remuneraciones mencionadas en el art. 5, inc. I, apart. b) de la Ley 27.260 serán actualizadas de acuerdo al índice combinado establecido en el Anexo I de la Res. S.S.S. 6, de fecha 18 de julio de 2016.

Art. 3 – La A.N.Se.S. implementará el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados a través de procedimientos informáticos.

Se habilitará una página web, a la que se deberá acceder ingresando la Clave de la Seguridad Social, para que los interesados puedan consultar si son alcanzados por el Programa, y en su caso, cuál es la propuesta de la A.N.Se.S.

El interesado deberá habilitar en la página web a su abogado para que éste pueda tener acceso a la propuesta de la A.N.Se.S.

Una vez que el beneficiario y su abogado hubieran tomado debido conocimiento de las condiciones del acuerdo y de su contenido económico, éste podrá ser aceptado electrónicamente.

La exteriorización de la voluntad de los beneficiarios y sus letrados se realizará a través de dicha página web, previo ingreso de las respectivas Claves de la Seguridad Social. Luego se procederá a la incorporación de la huella digital a través de un sistema de identificación biométrica en el documento que reproduzca el acuerdo transaccional, que se enviará al Poder Judicial de la Nación para su homologación.

La incorporación de la huella digital producirá los efectos atribuidos a la firma en el art. 288 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Cuando razones de salud tornaren imposible la intervención del beneficiario en persona, el acto podrá ser realizado por un apoderado con poder especialmente otorgado a tal efecto.

La autoridad de aplicación podrá establecer un procedimiento alternativo en soporte papel, para los casos excepcionales en los que no fuera posible realizar el procedimiento establecido en el presente artículo.

Art. 4 – Los acuerdos transaccionales que se celebren deberán contener, como mínimo, la siguiente información:

- a) Datos de las partes y sus abogados.
- b) Ley aplicable al otorgamiento del beneficio.
- c) Los conceptos del reajuste.
- d) Las pautas aplicadas.
- e) El monto del haber reajustado.
- f) El importe del retroactivo, en caso de corresponder, y la forma de cancelación.

Art. 5 – En los casos en que no se contare en las bases de datos con el detalle de las remuneraciones o de otros datos necesarios, la A.N.Se.S. podrá efectuar la recomposición del haber utilizando coeficientes que repliquen los resultados que arrojaría la aplicación de las pautas establecidas en el art. 5 de la Ley 27.260.

Art. 6 – Para los casos que tengan juicio iniciado, con o sin sentencia firme, la suscripción del acuerdo transaccional corresponderá al letrado que interviene en el mismo, o al nuevo que designe el beneficiario. En este último caso, se deberá cumplir con la normativa aplicable en la materia. El profesional que interviniera sin cumplir con la misma, será pasible de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder por dicho incumplimiento.

En los casos que no tengan juicio iniciado, el beneficiario podrá designar un abogado que cuente con matrícula habilitante para ejercer la profesión en la jurisdicción y fuero correspondiente al juez competente del domicilio de pago del beneficio.

Fíjase la suma de pesos quinientos (\$ 500) en concepto de honorarios, y a favor de la representación letrada del beneficiario, por la realización de todos los trabajos concernientes a la celebración y homologación de cada acuerdo transaccional previsto en el art. 7, inc. c), de la Ley 27.260 que por el presente se reglamenta.

El importe de honorarios referido se actualizará hasta la fecha de homologación por el régimen de movilidad establecido por la Ley 26.417.

La A.N.Se.S. podrá reconocer una suma adicional en concepto de gastos judiciales correspondientes a cada jurisdicción.

Ambos conceptos serán abonados por la A.N.Se.S., con fuente de financiamiento en el Tesoro Nacional.

Art. 7 – En caso de existir un reclamo judicial previo sobre un concepto contemplado en el acuerdo transaccional, el trámite de homologación del mismo tramitará ante el juez que interviene en dicho reclamo. De lo contrario, tramitará ante el juez federal del lugar de pago del beneficio previsional sobre el que verse el acuerdo.

El acuerdo transaccional será remitido por la A.N.Se.S. al Poder Judicial de la Nación, por medios electrónicos y/o digitales, para la formación del correspondiente expediente electrónico.

Una vez homologado el acuerdo, el juez de la causa podrá notificar, por medios electrónicos y/o digitales, al Ministerio Público Fiscal.

Art. 8 – Facúltase a la A.N.Se.S. a establecer procedimientos abreviados para aquellos beneficiarios que requieran una solución con mayor urgencia, por encuadrar en alguno de los siguientes supuestos:

- a) Ser mayor de 80 años o padecer una enfermedad grave.
- b) Tener un incremento del haber que no supere el treinta por ciento (30%) del haber mínimo garantizado a que se refiere el art. 125 de la Ley 24.241 y sus modificatorias, y un haber reajustado inferior a dos veces y medio dicho haber mínimo.

Art. 9 – Autorízase a la A.N.Se.S. a adoptar las medidas pertinentes que permitan garantizar la provisión de los recursos necesarios para la implementación del Programa teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que deben ser atendidas para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 27.260.

Art. 10 – El incremento de los haberes que perciba cada beneficiario en el marco del Programa no se computará a los fines del cálculo de los ingresos máximos permitidos para tener derecho a las tarifas sociales, siempre y cuando el haber reajustado no exceda en más de un veinticinco por ciento (25%) el monto equivalente a dos veces el haber mínimo garantizado a que se refiere el art. 125 de la Ley 24.241 y sus modificatorias.

Invítase a los Gobiernos provinciales y municipales a implementar disposiciones similares en sus respectivos ámbitos, cuando así correspondiere.

Art. 11 – A los fines de la determinación de los sujetos beneficiarios del régimen establecido mediante la Ley 27.253, instrúyese a los organismos competentes, a no considerar los incrementos producidos en los haberes de jubilados y pensionados como consecuencia del Programa, hasta tanto se efectúen las modificaciones normativas que contemplen dichas situaciones en forma definitiva.

Art. 12 – Las prestaciones que cuentan con un sistema de movilidad diferente del previsto para el régimen general, no se encuentran incluidas en las previsiones de la Ley 27.260.

TITULO II - Pensión universal para el adulto mayor

Art. 13 – La “Prestación universal para el adulto mayor” será otorgada por la A.N.Se.S.

Art. 14 – Instrúyese a los organismos de la Administración Pública Nacional a remitir a la A.N.Se.S. la información disponible en sus bases de datos, que colabore con el cumplimiento del control de los requisitos establecidos en el art. 13, incs. 1 y 5 de la Ley 27.260.

Art. 15 – El plazo referido en el primer párrafo del art. 22 de la Ley 27.260 vencerá el día 23 de julio de 2019.

TITULO III - Acuerdos con las provincias

Art. 16 – La A.N.Se.S., en su carácter de administradora del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, celebrarán con cada una de las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a solicitud de éstas y previa ratificación de los acuerdos referidos en los arts. 24 y 25 de la Ley 27.260, un “Contrato de mutuo” a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en el art. 3 de los citados acuerdos.

La A.N.Se.S., en su carácter de administradora del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), y el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas celebrarán un Acuerdo Marco Interadministrativo que establecerá los mecanismos de notificación de cada desembolso, el cobro de

intereses y amortizaciones, y el pago al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) de las sumas recaudadas, con más los intereses adicionales que, de ser necesario, abonará el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas para que la tasa de interés neta a percibir por dicho Fondo sea equivalente a la tasa de interés promedio ponderado por monto, correspondiente a depósitos a plazo fijo de treinta a treinta y cinco días de plazo, de más de pesos un millón (\$ 1.000.000), constituidos en los bancos privados incluidos en la totalidad de las entidades financieras del país (Badlar).

TITULO IV - Armonización de sistemas previsionales provinciales

Art. 17 – Las auditorías sobre los estados contables y financieros de las instituciones que administran los sistemas previsionales provinciales, así como la destinada a registrar la evolución normativa de tales sistemas, serán realizadas por la A.N.Se.S., a solicitud de cada provincia.

Art. 18 – En el plazo de cinco días corridos de recibida la solicitud, la A.N.Se.S. comunicará a la provincia solicitante, la información necesaria para la realización de la auditoría.

Dentro de los treinta días de recibida la comunicación provincial sobre la disponibilidad de la información, la A.N.Se.S. realizará la auditoría y elaborará el proyecto de convenio a suscribir, que contendrá el monto de la asistencia financiera nacional, el detalle de los avances provinciales en cuanto a la armonización normativa y las eventuales penalidades por la falta de avance a la misma.

Art. 19 – Las auditorías se desarrollarán en el marco conceptual de lo dispuesto por la Cláusula duodécima del Compromiso Federal, del 6 de diciembre de 1999, ratificado por la Ley 25.235.

Art. 20 – El objetivo de las auditorías comentadas será la determinación del resultado financiero corriente en base devengado, de los sistemas previsionales provinciales.

Art. 21 – A fin de realizar las auditorías, la A.N.Se.S. requerirá a cada organismo previsional provincial la información detallada de:

a) Los ingresos y egresos de cada subsistema, en base a los estados contables de los organismos debidamente certificados por las autoridades competentes.

b) Un detalle de afiliados aportantes al sistema previsional de la provincia y de la remuneración imponible de los mismos.

c) El gasto en jubilaciones, retiros y pensiones, con detalle de cantidad de beneficios/beneficiarios por ley de origen y por tipo de régimen.

d) Un detalle de beneficiarios por edad y tramo de haberes.

Art. 22 – Adicionalmente las provincias no adheridas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), deberán informar:

a) Nómina y remuneración del personal en relación de dependencia, que comprende el empleo público en general, de organismos centralizados o descentralizados, de empresas del Estado, municipales, del Poder Judicial, docentes, de seguridad, del Poder Legislativo, personal contratado, jubilados y pensionados y titulares de pensiones no contributivas.

b) Nómina de la totalidad de sus prestadores de servicios que revistan como trabajadores autónomos o como pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo), contratados por cada período mensual.

c) Datos de altas y bajas de cada uno de los trabajadores registrados o que la provincia incorpora o desafecta de su nómina laboral, así como las modificaciones que se generen, conforme la aplicación “Sistema registral empleadores” disponible en la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.).

La información indicada en los ptos. a) y b) deberá ser declarada mediante el F. 931, generado a través del aplicativo “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS” disponible en el sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) y la información indicada en el pto. c) deberá ser confeccionada conforme la aplicación “Sistema registral empleadores” disponible en la página web de A.F.I.P.

Art. 23 – La determinación del resultado financiero corriente global de las instituciones de Seguridad Social provinciales, se realizará según el marco metodológico que la A.N.Se.S. establecerá al efecto y que bajo la figura de anexos metodológicos, formarán parte integrante de los convenios que dicho organismo celebrará con las autoridades de cada provincia.

Art. 24 – El resultado financiero corriente a ser medido, tendrá las siguientes características no taxativas:

- a) Excluirá los recursos y erogaciones de capital.
- b) Excluirá las erogaciones en concepto de contribuciones patronales a obras sociales de cada Instituto Provincial de Seguridad Social, en cuanto a su rol de empleador. Igual criterio se seguirá cuando los organismos provinciales de Seguridad Social, contribuyan a obras sociales sobre la base de las liquidaciones de jubilaciones, pensiones y retiros.
- c) Excluirá los gastos de funcionamiento originados en el otorgamiento de aumentos salariales no remunerativos otorgados a los empleados.
- d) Excluirá de los gastos de jubilaciones y pensiones: a) aquellos aumentos verificados como consecuencia del otorgamiento de aumentos salariales no remunerativos; b) aquellos gastos en jubilaciones correspondientes a beneficiarios con edades menores a las exigidas por la Ley 24.241 y modificatorias; y c) aquellos gastos en jubilaciones correspondientes a beneficiarios que superen los límites máximos establecidos por las resoluciones de la A.N.Se.S., en cumplimiento de lo establecido por la Ley 26.417.
- e) Excluirá los gastos por retroactivos originados en el cumplimiento de sentencias judiciales firmes o arreglos extrajudiciales homologados judicialmente.
- f) Excluirá las erogaciones de regímenes de pasividad anticipada o de retiros voluntarios.
- g) Excluirá las erogaciones originadas en la sanción de nuevas normativas que garanticen haberes mínimos o los aumentos de los mismos.
- h) Excluirá los gastos bancarios que no sean consecuencia de las pasividades que se abonan.
- i) Excluirá las erogaciones originadas en prestaciones por invalidez, cuando las mismas no hayan sido calificadas y establecidas con sujeción al “Baremo nacional” y las pautas interpretativas aplicadas por las Comisiones Médicas, en virtud de la Ley 24.241 y sus modificatorias.
- j) Excluirá aquellos ingresos por aportes y contribuciones de los organismos provinciales, originados en alícuotas que estén por encima de las vigentes en la jurisdicción nacional. Tales ingresos serán calculados según las alícuotas nacionales vigentes y las bases imponibles establecidas por las resoluciones de la A.N.Se.S., en cumplimiento de lo establecido por la Ley 26.417.

k) Excluirá todo otro ingreso por aportes personales y contribuciones patronales que no estén previstos en la normativa nacional en la materia.

l) Excluirá intereses u otros gastos de financiamiento.

m) Incluirá hasta el cincuenta por ciento (50%) de los gastos de funcionamiento de los organismos provinciales, considerando para ello, las erogaciones realizadas en personal, bienes de consumo y servicios no personales. El monto así determinado formará parte de las erogaciones consideradas para la determinación del resultado financiero, siempre que las mismas no superen el tres por ciento (3%) de la recaudación de aportes personales y contribuciones patronales del sistema previsional provincial. Este porcentaje operará como tope máximo del gasto de funcionamiento a ser reconocido.

Art. 25 – La asistencia financiera a las provincias estará basada en los resultados financieros auditados de los sistemas previsionales administrados por los organismos provinciales.

Art. 26 – En los ejercicios 2017 y siguientes, la asistencia financiera se determinará en base a: 1. el resultado financiero corriente global que determinen las auditorías que realice A.N.Se.S. del ejercicio anterior; y 2. el grado de avance alcanzado por cada jurisdicción provincial en el proceso de armonización normativa de su legislación con la vigente en la Nación. Por armonización normativa se entiende la convergencia de la legislación provincial con la nacional en cuanto a los siguientes conceptos: i. edad de acceso a una jubilación ordinaria; ii. alícuotas de aportes personales y contribuciones patronales; iii. cantidad de años de servicio con aportes efectivos; iv. determinación del haber inicial; y v. mecanismo sustentable de movilidad de los haberes jubilatorios. Cada uno de dichos conceptos tendrá una ponderación del veinte por ciento (20%).

Art. 27 – Partiendo de la situación actual de armonización a la normativa previsional nacional, se requerirá a las provincias completar el proceso de armonización normativa en un plazo no mayor a cuatro años. En tal sentido, el Estado nacional suscribirá convenios bilaterales anuales con cada provincia por los que, a través de A.N.Se.S. se otorgará la asistencia financiera de los ejercicios 2017 a 2020, inclusive. Dicho financiamiento de los resultados financieros globales auditados, se realizará tomando en consideración el grado de avance alcanzado por cada provincia, en los conceptos citados en el artículo precedente.

Art. 28 – Los convenios bilaterales anuales que el Estado nacional suscriba con cada provincia establecerán el monto de la/s transferencia/s a realizar durante la vigencia del convenio, en base a los resultados financieros corrientes globales auditados del

ejercicio anterior, ponderados por los conceptos ya armonizados. A elección de la provincia y sujeto a que las disponibilidades presupuestarias de A.N.Se.S. lo permitan, dicha asistencia financiera podrá ser transferida en una cuota luego de la firma del convenio o en forma mensual ajustada en los meses de marzo y setiembre de cada año, según la movilidad dispuesta por la Ley 26.417.

Art. 29 – Adicionalmente, cada convenio bilateral anual establecerá el compromiso que asumirá cada provincia durante la vigencia del mismo, en cuanto al proceso de armonización normativa. Cada avance en dicho proceso, dará lugar al aumento del porcentaje del resultado a ser financiado. A tal efecto, la armonización de un nuevo concepto mejorará en un veinte por ciento (20%) el monto de asistencia financiera a transferir. Dicha asistencia adicional se hará en una única transferencia cuando A.N.Se.S. verifique el cumplimiento del compromiso asumido por la provincia. Se entenderá que un concepto ha sido cumplido o armonizado al momento que se encuentre vigente la ley provincial que armonice el nuevo concepto.

Art. 30 – En caso de no verificarse ningún avance en materia de armonización durante la vigencia del convenio, para la asistencia del año siguiente A.N.Se.S. podrá aplicar una quita de diez puntos porcentuales acumulativos respecto del monto que le correspondería según el esquema propuesto. De este modo, cada provincia podrá ver aumentada o reducida la asistencia financiera que recibe, según sean el esfuerzo y voluntad de armonización demostrados.

Art. 31 – A partir del ejercicio 2021, inclusive, no se asistirá financieramente a los regímenes provinciales que no hayan armonizado a la normativa nacional los cinco conceptos mencionados en el art. 26. En el caso de aquellos regímenes provinciales que vieran reducida o suprimida su asistencia financiera producto de los escasos o nulos esfuerzos de armonización durante el período 2017 a 2020, inclusive, el Estado nacional podrá reiniciar la asistencia financiera de acuerdo con un esquema de armonización a convenir con cada provincia.

Art. 32 – En el caso de que cláusulas constitucionales impidan el proceso de convergencia normativa con la legislación nacional, en alguno de los ítems comentados precedentemente, la provincia de que se trate, deberá proponer un esfuerzo mayor en otro concepto, con el fin de garantizar la equidad en el esfuerzo fiscal de cada jurisdicción provincial. El mayor gasto resultante no será financiado por el Estado nacional y estará a cargo exclusivo de la provincia.

Art. 33 – La asistencia financiera a los sistemas previsionales provinciales precedentemente mencionada será financiada por el Tesoro Nacional e instrumentada a través de A.N.Se.S.

Dichos recursos ingresaran al organismo y no serán considerados para el cálculo de la movilidad dispuesta por la Ley 26.417. Previo a la firma de los convenios con cada provincia, A.N.Se.S. informará a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, el detalle de las erogaciones a producirse en virtud del convenio. En los casos, en que el crédito vigente resulte insuficiente, A.N.Se.S. dará intervención a la Secretaría de Hacienda mencionada, a los fines del análisis del impacto presupuestario y de las implicancias financieras.

TITULO V - Adecuación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del SIPA

Art. 34 – Sustitúyese el art. 1 del Dto. 1.278, del 25 de julio de 2012, por el siguiente texto:

“Artículo 1 – La Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas tendrá a su cargo entender en la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de empresas donde el Estado nacional sea socio minoritario, así como también en aquellas sociedades donde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas posea tenencias accionarias o de capital, e instruir a los representantes del Estado nacional o propuestos por él en tales sociedades o empresas, excepto por aquellas sociedades cuyas acciones integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), creado por el Dto. 897, del 12 de julio de 2007, y su modificatorio, cuyos derechos societarios, políticos y económicos estarán a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.)”.

Art. 35 – Los directores designados por la A.N.Se.S. tendrán las funciones, deberes y atribuciones que establecen las Leyes 19.550 (t.o. en 1984) y sus modificatorias, y 26.831 y sus disposiciones complementarias y reglamentarias, y todas las normas aplicables a la sociedad en la que actúan, sus estatutos y reglamentos internos y estarán alcanzados por todas las responsabilidades que pudieran corresponderles bajo dichas normas. No serán aplicables a dichos directores las disposiciones de los Dtos. 1.278, del 25 de julio de 2012, y 196, del 10 de febrero de 2015.

Art. 36 – Atribúyese a la A.N.Se.S. la competencia para dictar las normas que establezcan el marco regulatorio de los representantes y directores designados por las acciones que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS).

Art. 37 – En el supuesto de que el director se encuentre ejerciendo otras funciones públicas dentro de la Administración Pública Nacional, y le corresponda percibir honorarios por sus funciones en el Directorio de una sociedad, percibirá por sus funciones en el Directorio un plus mensual sobre su remuneración habitual, que será solventado por las empresas y sociedades en las que cumpla dichas funciones. El importe a percibir por dicho plus en ningún caso resultará superior a siete coma cincuenta (7,50) veces el aporte mensual que corresponda ingresar a los trabajadores incluidos en la Categoría V del “Régimen para trabajadores autónomos”, en este concepto.

Art. 38 – Los directores referidos en el artículo anterior quedan exceptuados de las incompatibilidades remunerativas previstas en el “Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional”, aprobado por el Dto. 8.566, del 22 de setiembre de 1961, sus modificatorios y complementarios, en relación con los montos establecidos en el reglamento a dictarse por la A.N.Se.S.

Art. 39 – Sustitúyese el art. 11 del Dto. 897, del 12 de julio de 2007, y su modificatorio, por el siguiente texto:

“Artículo 11 – El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) podrá:

1. Financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.) para el pago de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) siempre que durante la ejecución de su presupuesto se presentaren situaciones de contingencia que así lo requieran; y
2. atender el pago de reajustes de haberes en situaciones, debidamente fundadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.), en las que por razones de edad avanzada del beneficiario, padecimiento de una enfermedad grave, o por la escasa significación económica del reajuste, se justifique un tratamiento prioritario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.) determinará las situaciones en las que se aplicarán estos mecanismos”.

Art. 40 – Sustitúyese el art. 12 del Dto. 897, del 12 de julio de 2007 y su modificatorio, por el siguiente texto:

“Artículo 12 – En la oportunidad en que resulte necesaria la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) para

los fines previstos en el inc. 1 del art. 11 del presente decreto, el organismo administrador deberá informar a la Jefatura de Gabinete de Ministros si el déficit proyectado o real es transitorio y subsanable o si por el contrario, se origina en cuestiones estructurales que requieran de modificaciones en el régimen vigente.

En el caso que la evaluación que se realice indique que la causa que origina el déficit pone en riesgo la sustentabilidad de largo plazo del régimen previsional público, el Poder Ejecutivo nacional propondrá las reformas necesarias que permitan dar solución a la situación planteada”.

Art. 41 – Derógase el art. 15 del Dto. 2.103, del 4 de diciembre de 2008.

TITULO VI - Disposiciones finales

Art. 42 – El presente decreto comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 43 – De forma.